

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### SALA DE DECISIÓN LABORAL

Hoy, quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **ARGELIO DE JESÚS SOSA LONDOÑO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), tramitado bajo el radicado único nacional 05001-31-05-018-2018-00586-01.

El magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y la Sala, previa deliberación sobre el asunto, adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos.

#### 1. ANTECEDENTES:

A través de la presente demanda, pretende el demandante el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a partir del momento de cumplimiento de los requisitos, bajo las prerrogativas del Artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, así como el pago de intereses moratorios o en subsidio la indexación, y las costas procesales.

**Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, en lo que interesa resolver a esta instancia expone el demandante** que previo a solicitar ante Colpensiones el reconocimiento de su pensión de vejez, le solicitó a dicha entidad los días 14 de febrero y 18 de abril de 2017 la corrección de su historia laboral, solicitud que le fue despachada de manera desfavorable, señalando que de acuerdo a lo informado por la AFP PROTECCIÓN S.A. se logró visualizar que el empleador COMPAÑÍA SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRO no efectuó pagos por concepto de seguridad social para los ciclos 1996-1 a 1996-8, 1996-10, 1998-1 a 1998-3, razón por la cual, de acuerdo a la imputación de pagos no se contabiliza el total de días para los ciclos 1998-4 a 1998-6 y 1999-4 a 1999-8, indicándole que debía verificar dichos pagos directamente con el empleador y en caso de haberse realizado acudir a la AFP PROTECCIÓN, para que esta se encargue de aplicar los aportes y remitir el pago y la información a Colpensiones.

Señala que la negativa de la demandada para reconocer la prestación económica solicitada se fundamentó en situaciones ajenas al afiliado y que son de responsabilidad exclusiva de los fondos de pensiones, como lo es la gestión de las acciones de cobro por mora en los aportes pensionales, por lo que los periodos aludidos deben ser tenidos en cuenta.

## **2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:**

La *a quo* despachó favorablemente las pretensiones de la demanda, condenando a COLPENSIONES a reconocer y pagar al demandante la pensión de vejez de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, a partir del 1° de abril de 2016, en cuantía de 1 SMLMV, y en el número de 13 mesadas pensionales al año, condenando igualmente al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Para el efecto, argumentó la juez de primera instancia que revisada la historia laboral del demandante, se advierta la realización de imputación de pagos sobre algunos periodos, los cuales a su juicio deben ser tenidos en cuenta en el total de semanas cotizadas por el demandante en aplicación de la teoría de la inimputabilidad de la mora, encontrando que los periodos que no fueron tenidos en cuenta por Colpensiones ascienden a un total de 35,42 semanas, las que sumadas a las 1272,71 que le figuran al actor en su historia laboral, dan un total de 1308,14 semanas cotizadas durante toda su vida laboral.

Por otro lado, consideró la falladora de primer grado, que en el presente caso resultaban procedentes los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, dado que el demandante realizó la solicitud de reconocimiento pensional el día 13 de julio de 2017, cumpliendo para dicha calenda con la totalidad de los requisitos para acceder a la prestación, dado que no se podía imputar la responsabilidad de la mora de sus empleadores y por ende Colpensiones tenía hasta el 13 de noviembre de 2017 para reconocer la prestación, sin embargo no lo realizó, incurriendo en mora a partir del 14 de noviembre de 2017.

## **3. DEL RECURSO DE APELACIÓN.**

La apoderada judicial de COLPENSIONES, interpuso recurso de apelación en contra la sentencia de primera instancia, argumentando que de conformidad con lo establecido en los artículos 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, y 57 del Decreto 1748 de 1995 modificado por el artículo 17 del Decreto 3798 de 2003, no pueden ser tenidos en cuenta para el cómputo total de las

semanas cotizadas por el demandante, periodos cuyos pagos no fueron recibidos a satisfacción por Colpensiones.

Expone además que los periodos tenidos en cuenta por la *a quo*, son periodos cuyos pagos no fueron recibidos a satisfacción de la AFP del RAIS COLMENA S.A., a la cual se trasladó el demandante en el año 1996, señalando además que dado que solo a partir del año 2007 fue que se definió la múltiple vinculación del actor y regresó al RPM, contrario a lo señalado por la *a quo*, no le correspondía a Colpensiones efectuar las acciones de cobro persuasivo y coactivo de tales periodos adeudados, pues para dichas fechas el actor no se encontraba afiliado a Colpensiones sino a la AFP privada del RAIS.

Aduce que debe tenerse en cuenta además que en los actos administrativos a través de los cuales se negó la pensión de vejez al demandante, le fue indicado con claridad los trámites que debía realizar con el fin de incluir dichas semanas que figuraban en su historia laboral.

Manifiesta su desacuerdo con la fecha a partir de la cual se reconoció el pago retroactivo de la prestación, dado que el demandante realizó su última cotización en el mes de enero de 2017 y por ende solicita que, en caso de confirmarse la condena, se modifique dicho aspecto de la decisión.

Finalmente, en lo que tiene que ver con la condena al pago de intereses moratorios, señala que la línea jurisprudencial desarrollada por la SCL de la CSJ a partir del año 2013, expone la ponderación de criterios subjetivos para la imposición de los intereses, es decir que en cada caso debe tenerse en cuenta cuales fueron las razones que dieron lugar a la negativa de la entidad en el reconocimiento de la pensión, y en el presente caso, si bien el demandante presentó dos reclamaciones en las fechas indicadas por el despacho, lo cierto es que para ese momento no se había recibido el pago o el cálculo actuarial sobre los periodos adeudados, y la negativa de la entidad se realizó en aplicación legal del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

#### **4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:**

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, ninguna de las partes allegó escrito de alegaciones.

#### **5. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:**

El problema jurídico a dilucidar se circunscribe a establecer, si el demandante cumple con los requisitos legales para el reconocimiento y pago de pensión de vejez, en los términos del artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y en caso afirmativo, habrá de definir a partir de qué fecha debe ser reconocida la prestación y si resulta procedente ordenar en su favor el pago de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Tramitado el proceso en legal forma y no avizorándose hecho que conlleve a su nulidad, y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la apelación, conforme a lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes.

## **6. CONSIDERACIONES:**

En principio debería la Sala ocuparse del estudio del recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad social, según el cual: *“La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”*, sin embargo, al haber resultado la decisión de primer grado adversa a los intereses de COLPENSIONES, se estudiará la legalidad del fallo en su integridad, de conformidad con las disposiciones del art. 14 de la Ley 1149 de 2007.

Para resolver lo que corresponde a esta instancia, resulta indispensable señalar que no es objeto de discusión que el demandante presentó traslado del RPM al RAIS y que posteriormente, por decisión del Comité de Múltiple Vinculación, al declararse nulo su traslado de régimen pensional, retornó al régimen de prima media del ISS hoy COLPENSIONES.

Tampoco es objeto de debate en esta instancia, que el demandante solicitó el 13 de julio de 2017 el reconocimiento de la pensión de vejez ante Colpensiones, y que dicha entidad resolvió tal solicitud de manera desfavorable a través de la Resolución SUB 170083 del 24 de Agosto de 2017, luego de considerar que no cumplía con las semanas necesarias para acceder a la prestación, conclusión a la que llegó luego de realizar imputación de pagos sobre algunos periodos no cotizados o cotizados deficitariamente por algunos empleadores mientras el demandante estuvo afiliado al RAIS, previo a la anulación de dicho traslado y su retorno al RPM.

Es así entonces que el principal problema jurídico que debe ser resuelto por esta superioridad, consiste en determinar si Colpensiones podía realizar en favor del

afiliado, la imputación de pagos sobre los periodos no cotizados o cotizados deficitariamente por algunos empleadores ante el RAIS y además debe dilucidarse si la responsabilidad en el ejercicio de las acciones de cobro de tales aportes se encontraba en cabeza de Colpensiones o de la AFP del RAIS a la cual se afilió en su momento el demandante.

En este punto, ha de señalarse que coincide la Sala con lo señalado por la *a quo*, referente a que la falta de pago oportuno por parte del empleador de las cotizaciones, o la omisión en el ejercicio de la acción de cobro por parte de las administradoras de fondos de pensiones no debe perjudicar al trabajador, dado que la jurisprudencia de la SCL del CSJ, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, han precisado que las AFP deben tener en cuenta los aportes pensionales que se encuentren en mora en el pago de los empleadores del trabajador dependiente, pues al haber omitido la acción de cobro de las cotizaciones las AFP deben asumirlas sin que se le pueda trasladar al trabajador las consecuencias de su inacción en el cobro de las cotizaciones.

Por otra parte, en lo que respecta a la responsabilidad de Colpensiones en el ejercicio de la acción de cobro, debe señalar la Sala que, al declararse nulo el traslado del demandante al RAIS por parte del Comité de Múltiple Vinculación, como fue reconocido expresamente por Colpensiones en los actos administrativos que negaron la pensión de vejez al demandante, resulta claro que el efecto práctico de dicha decisión es entender que el afiliado permaneció todo el tiempo afiliado al RPM, y por ende, debe concluirse que la responsabilidad en el ejercicio de las acciones de cobro frente a los empleadores morosos al menos desde que se decidió la multivinculación, estuvo en cabeza del extinto ISS y posteriormente de Colpensiones, por lo que, contrario a lo argumentado por la recurrente, la única gestión que se le podía exigir al actor era manifestar qué inconsistencia tenía su historia laboral, lo que le puso de presente a Colpensiones.

A pesar de lo anterior, analizado en detalle el resumen de días cotizados que quedó plasmado en las Resoluciones SUB 170083 del 24 de agosto de 2017 y SUB 1213171 del 27 de abril de 2018, en las cuales se concluyó que el actor cuenta con 1273 semanas cotizadas, y concordado dicho resumen con el detalle de la historia laboral allegada al plenario encuentra la Sala que, contrario a lo concluido tanto por Colpensiones en sede administrativa, como por la Juez de primer grado, el demandante no acredita, ni las 1.273 semanas a las que alude Colpensiones en sus resoluciones, ni mucho menos las 1.308 que dictaminó la juez en su sentencia, pues se evidencia que en sede administrativa Colpensiones cometió el error de contabilizar de manera doble algunos ciclos que presuntamente fueron laborados de manera

simultánea por el demandante, es decir, que se computaron 60 días por cada mes laborado simultáneamente, lo que a todas luces resulta un imposible jurídico, pues aun en aquellos casos en los que el trabajador presta sus servicios de manera simultánea a varios empleadores, únicamente resulta posible contabilizar 30 días por mes, sin perjuicio de la sumatoria de ambas cotizaciones para determinar el IBC correspondiente a dicho ciclo de cotización.

En efecto el parágrafo segundo del artículo 20 del citado Decreto, dispone:

*“PARAGRAFO 2o. Los afiliados sólo podrán cotizar a una administradora, aunque preste servicios a varios empleadores o sea a la vez trabajador dependiente e independiente.*

*En aquellos casos en que el afiliado perciba salario de dos o más empleadores. Las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario devengado de cada uno de ellos, y dichos salarios se acumularán para efectos del monto de la pensión.”*

Es clara la norma legal antes referida al señalar que las cotizaciones simultaneas se acumulan para efectos del IBC como ya se explicó, pero en ningún caso, ni antes ni después de la expedición de la Ley 100 de 1993, pueden ser tenidos en cuenta para efecto del cómputo de semanas cotizadas, pues escapa a la lógica pretender que por el hecho de haber laborado simultáneamente para dos o más empleadores en un mismo ciclo de cotización, deba contabilizarse un número de días superior a los días del mes.

Es así entonces que, en los actos administrativos aludidos, se tuvieron en cuenta tiempos superiores a los 30 días por mes en los siguientes ciclos así:

- Octubre de 1995: 41 días
- Marzo de 1996: 60 días
- Abril de 1996: 60 días
- Mayo de 1996: 60 días
- Junio de 1996: 60 días
- Julio de 1996: 60 días
- Agosto de 1996: 60 días
- Septiembre de 1996: 57 días

Conforme lo anterior, encuentra la Sala que para computar las 1.273 semanas a las que hizo alusión en los actos administrativos por medio de los cuales se negó la pensión de vejez al demandante, Colpensiones tuvo en cuenta de manera errada, un total de 218 días adicionales a los que debió tener en cuenta en realidad, lo que equivale a un total de 31,14 semanas, lo que se traduce en que el actor únicamente

cuenta con 1.241,86 semanas cotizadas.

Ahora, si bien en la historia laboral del actor le figura un total de 1247,14 semanas, dicha diferencia se justifica en una contabilización de 11 días en exceso respecto del periodo octubre de 1995 y de 27 días en exceso respecto del periodo septiembre de 1996, para un total de 38 días, equivalentes a 5,42 semanas, las que, descontadas, arrojan como resultado que el demandante únicamente cotizó un total de 1241 semanas.

Así las cosas, analizada la situación anterior, encuentra la Sala que, no es posible tener en cuenta como lo hizo la *a quo*, ni los 4 días del ciclo de octubre de 1995, ni los 3 días del ciclo de septiembre de 1996, ni 1 día correspondiente al ciclo de marzo de 1998, pues frente a los dos primeros ciclos, los días tenidos en cuenta por la *a quo*, corresponden a ciclos que ya se encuentran contabilizados por 30 días en la historia laboral y frente al último ciclo mencionado no se observa ningún tipo de cotización para dicho periodo.

En conclusión, habrán de tenerse en cuenta como periodos válidamente cotizados por el demandante, los ciclos completos correspondientes a 1998-4 a 1998-6 y 1999-4 a 1998-8, para un total de 240 días, que reclamaba en la demanda equivalentes a 34,28 semanas.

Pese a lo anterior, encuentra la Sala que, teniendo en cuenta los periodos antes referidos, correspondientes a 34,28 semanas, sumadas a las 1241 válidamente cotizadas en la historia laboral, el demandante no logra alcanzar las 1.300 semanas de cotización requeridas para acceder a la pensión de vejez que deprecia, pues solo se le pueden tener en cuenta en total **1.275,28** semanas, lo que conlleva forzosamente a que deba revocarse la sentencia de primera instancia que se revisa en apelación y consulta en favor de Colpensiones, y en su lugar deba declararse probada la excepción de FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR propuesta por Colpensiones.

Conforme lo que viene de decirse, se hace innecesario, por sustracción de materia, entrar a resolver sobre los demás puntos de apelación propuestos por la apoderada de Colpensiones.

Las costas de primera instancia estarán a cargo del demandante y en favor de Colpensiones, las agencias en derecho serán fijadas en su momento por la *a quo*.

Sin costas en esta instancia al haberse revocado la sentencia en el grado jurisdiccional

de consulta.

## 7. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO:** **REVOCAR** la sentencia del 18 de junio de 2020 proferida por el JUZGADO DIECIOCHO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el presente proceso ordinario laboral de primera instancia, promovido por el señor **ARGELIO DE JESÚS SOSA LONDOÑO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES**, para en su lugar **ABSOLVER** a COLPENSIONES de todas las pretensiones del actor.

**SEGUNDO:** Costas de primera instancia a cargo del demandante y en favor de Colpensiones. las agencias en derecho serán fijadas en su momento por la *a quo*.

Sin costas en esta instancia

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, por quienes intervinieron en la decisión, los Magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez



**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**John Jairo Acosta Perez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **456b314846420aa27e2609b17e520177eae302d35d7f3874764cf5ffc7df90cc**

Documento generado en 15/12/2022 11:52:36 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**